Ayotzinapa: ¿justicia o política maniquea?

Guillermo Valdés Castellanos

No aprendemos. O preferimos –por encima de la verdad— imponer nuestros pre-juicios y/o intereses políticos. Desde que Felipe Calderón inició la lucha contra el crimen organizado, la mayor parte del debate fue político. Una gran cantidad de “análisis” no buscaba entender el problema de la violencia, sino adjudicar su responsabilidad al ex presidente Calderón, de manera directa y exclusiva. A más de un crítico se le llenaba la boca con la frase de “los miles de muertos de Calderón”. Como si su salida solucionara el problema.

Una variante, menos personalizada, le atribuía al Estado (a sus políticas de intervención o al despliegue del ejército) todos los homicidios y todas las desapariciones. No se trataba de buscar una explicación seria de las causas de la violencia, sino responsabilizar, e incluso culpabilizar jurídicamente a instituciones de las múltiples formas que adquirió la violencia.

Privilegiar objetivos políticos en el debate de los problemas tiene consecuencias: la sociedad y la política se polarizan, pero más grave es no avanzar en el conocimiento de las causas, lo cual impide mejorar las políticas y estrategias en materia de seguridad que solucionen los problemas.

El caso de Ayotzinapa ha seguido la misma lógica. Pareciera que a los padres de los desaparecidos, a sus asesores y acompañantes no les interesa la verdad si esta no dice que el ejército, la policía federal y el Estado completo son los principales culpables directos. “Fue el Estado”, ha sido la consigna desde hace un año; la realidad se tiene que apegar al prejuicio.

Quieren justicia con toda razón, y el Estado está obligado a hacerla. Pero que prácticamente todos los autores materiales e intelectuales (sicarios y jefes de plaza de la organización criminal Guerreros Unidos; policías y autoridades municipales) ya estén presos y sujetos a procesos penales, no parece tener la menor importancia, porque entre los inculpados no hay soldados ni policías federales, ni el ex procurador Murillo Karam, ni nadie de ese tamaño que confirme que fue el Estado con mayúscula.

Me parece una torpeza, por decir lo menos, cómo la PGR evadió y minimizó temas de la investigación (la desconfianza se la han ganado a pulso): el móvil de la masacre; el probable robo involuntario o no de un cargamento de base de opio; la causa del desplazamiento de los estudiantes a Iguala y, por supuesto, la eventual participación de policías federales y del ejército. La investigación debe continuar a fondo, con la participación del grupo de expertos de la CIDH, para esclarecer todo eso. Pero aún en caso de que se confirme la participación de soldados y policías federales, ello no significaría ni una decisión del “Estado”, ni que él presidente o el gobierno federal fueran los principales culpables.

Es una visión simplista y maniquea que no conducirá a resolver el problema de la violencia en Guerrero. Hacer justicia, además de castigar a los todos responsables, implicaría demandar tres cosas, que no están ni por equivocación en el pliego del movimiento: 1) perseguir y desarticular por completo a las organizaciones criminales (Guerreros Unidos y Rojos) que son los culpables directos de haber asesinado, secuestrado y desaparecido a miles de guerrerenses. 2) Una limpia a fondo de las podridas estructuras políticas y policiacas de todo el estado y, 3) una propuesta de desarrollo económico alternativo para erradicar el cultivo de amapola como única opción productiva. Pero parece que a los líderes les importa más hacer política que resolver el problema de Guerrero y hacer justicia.